

dio traslado en este proceso de amparo para que realizara las alegaciones que tuviera por convenientes en relación con el amparo solicitado (diligencia de ordenación de 26 de febrero de 2008).

En efecto, salvo que convirtiéramos el derecho a la prueba en un derecho puramente formal, es exigible en un caso como el presente, en el que la prueba ha sido practicada tardíamente pero en el que constan sus resultados en el proceso de amparo, que el análisis de la relevancia de la prueba no lo sea únicamente ex ante, como el propio del momento de su solicitud, sino también posterior a su práctica e integrador de sus resultados. No lo hace así, sin embargo, el demandante, que ninguna referencia hace en su escrito de alegaciones al resultado de la prueba. Procede recordar al respecto nuestra consolidada doctrina relativa a que «la situación de indefensión como consecuencia de la inadmisión no motivada o arbitraria de medios de prueba pertinentes para la defensa debe de ser justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda, pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por este Tribunal Constitucional mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente en amparo. Esta carga de la argumentación se traduce en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite, tanto la relación entre los hechos que se quisieron, y no se pudieron probar, y las pruebas inadmitidas o no practicadas, como el hecho de que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haber admitido y practicado dichas pruebas, quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso, ya que sólo en tal caso, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber sido otro, si la prueba se hubiera admitido o practicado, podrá apreciarse también un menoscabo efectivo del derecho de defensa. De no constatar la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa, resultará ya evidente *ab initio*, sin necesidad de ulterior análisis, que no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos señalado, el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FFJJ 2 y 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 183/1999, de 11 de octubre, FJ 4; 27/2001, de 29 de enero, FJ 8; 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 4; 128/2003, de 30 de junio, FJ 4; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 5, por todas)» (STC 316/2006, de 15 de noviembre, FJ 3).

Concluimos pues con la desestimación esta última queja, a la vista de la falta de argumentación suficiente en torno a la relevancia de la prueba tardíamente practicada. Procede por ello que dictemos el fallo denegatorio del amparo previsto en el artículo 53 b) LOTC.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1.º Inadmitir el amparo solicitado por don Fermín Martínez Nantón respecto de la queja referente a la incongruencia omisiva (art. 24.1 CE).

2.º Denegar el amparo solicitado respecto del restante contenido de la demanda.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.—María Emilia Casas Baamonde.—Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.—Manuel Aragón Reyes.—Pablo Pérez Tremps.—Firmado y rubricado.

17408 *Sala Primera. Sentencia 114/2008, de 29 de septiembre de 2008. Recurso de amparo 11551-2006. Promovido por don Manuel Gómez Barbeito frente a la Sentencia de un Juzgado Contencioso-Administrativo de A Coruña que inadmitió su demanda sobre embargo por débitos a la Seguridad Social.*

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia): inadmisión de demanda contencioso-administrativa por defecto legal en el modo de proponerla, al no haber impugnado también la resolución del recurso de alzada administrativa.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 11551-2006, promovido por don Manuel Gómez Barbeito, representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistido por el Abogado don Eduardo Aguiar Boudin, contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña 159/2006, de 7 de noviembre. Ha comparecido la Tesorería General de la Seguridad Social. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 26 de diciembre de 2006 don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Manuel Gómez Barbeito, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Por Sentencia de 19 de diciembre de 1998, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Betanzos (A Coruña), declaró la incapacitación civil del hoy demandante de amparo don Manuel Gómez Barbeito, siendo nombrada tutora del mismo su esposa doña María Ángeles Cagiao en virtud del Auto dictado por el mismo Juzgado de 12 de febrero de 1999.

b) A consecuencia de débitos a la Seguridad Social (en concreto 3.688,30 euros), por medio de diligencia de fecha de 18 de mayo de 2006 el Sr. Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 2, dependiente de la Seguridad Social de A Coruña, procedió al embargo del

saldo existente en una cuenta bancaria del que era titular don Manuel Gómez Barbeito, la cual se nutría únicamente de los ingresos correspondientes a una pensión de gran invalidez que la Seguridad Social venía abonando a aquél, una vez practicada ya sobre ésta otra retención motivada por aquellos débitos.

c) Contra dicha diligencia, la esposa, en su condición de tutora del hoy demandante de amparo, interpuso recurso de alzada mediante escrito que presentó ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 2 de la Dirección Provincial de la Seguridad Social de A Coruña, que fue estimado parcialmente por Resolución de 26 de junio de 2006.

d) Frente a dicho acto se interpuso en nombre del hoy demandante de amparo recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña de fecha de 7 de noviembre de 2006, dictada en el procedimiento abreviado núm. 211-2006, por hallarse un «defecto legal en el modo de proponer la demanda» al omitirse la impugnación de la resolución administrativa por la que se resolvió el recurso de alzada.

3. El demandante de amparo denuncia infracción del principio de legalidad (art. 9.3 CE) por entender que la Sentencia impugnada desestima el recurso al apreciar un defecto en el modo de proponer la demanda, cual es haber interesado se declarara la nulidad de la diligencia de embargo pero no la de la resolución parcialmente estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra ella, no previsto legalmente. Asimismo estima vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por cuanto la resolución judicial impide obtener un pronunciamiento de fondo sobre un acto de la Administración que, a su juicio, es de todo punto ilegal.

4. La Sección Primera del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de diciembre de 2007, acordó admitir la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese testimonio de los autos núm. 211-2006 y expediente de la Tesorería General de la Seguridad Social, interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, ya personado, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero de 2008, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 y Tesorería General de la Seguridad Social A Coruña, y por personada y parte en el procedimiento a Letrada de la Seguridad Social en nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dio vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro del cual pudieran efectuar las alegaciones que tuvieron por conveniente.

6. La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 12 de marzo de 2008. En él dan por reproducidas las alegaciones efectuadas en la demanda.

7. La Letrada de la Seguridad Social evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 19 de marzo de 2008, interesando la inadmisión. Entiende que la demanda de amparo debe ser inadmitida ex art. 50.1 c) LOTC por falta de contenido constitucional

por cuanto el órgano judicial se ha limitado a apreciar un defecto procesal, recordando la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual el derecho a la tutela judicial efectiva no puede entenderse con derecho a obtener una Sentencia favorable. Alega también la violación del art. 44 a) y c) LOTC, pues no presentó recurso administrativo contra la resolución administrativa así como recurso de casación para unificación de doctrina ni citó en las dos instancias anteriores el derecho fundamental que consideraba vulnerado. Respecto de la infracción del art. 9.3 CE alega que dicho precepto no es de los susceptibles de ser recurrido en amparo.

8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 28 de mayo de 2008, interesando el otorgamiento del amparo. Reconoce que la demanda presentada es algo confusa en cuanto a la determinación del objeto de impugnación, pero a su juicio la Sentencia impugnada «efectuó una interpretación y aplicación de los requisitos legales caracterizada por un rigorismo o formalismo excesivo y, en todo caso, con evidente desproporción entre los fines que esos requisitos legales preservan y la consecuencia del cierre del proceso que conllevan, con eliminación injustificada del derecho a que un órgano judicial resuelva sobre el fondo de la pretensión a él sometida».

9. Por providencia de 25 de septiembre se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Conforme se ha dejado expuesto en los antecedentes, la demanda de amparo se dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña 159/2006, de 7 de noviembre, que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la Resolución de la Dirección Provincial de A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social de 26 de junio de 2006, parcialmente estimatoria del recurso de alzada contra la diligencia de embargo de 18 de mayo de 2006 dictada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva 15/2002, por débitos a la Seguridad Social.

Denuncia la demanda de amparo la vulneración del principio de legalidad (art. 9.3 CE) así como del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, pues, a juicio del recurrente, la causa por la que el órgano judicial desestimó la demanda –haber interesado que se declarara simplemente la nulidad de la diligencia de embargo, pero no la de la resolución parcialmente estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la misma–, además de no estar prevista legalmente impide una decisión sobre el fondo del asunto.

Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa la estimación de la demanda al considerar que «se ha vulnerado el principio “pro actione” que exige a los órganos judiciales que, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto».

Por último, la Letrada de la Seguridad Social solicita la inadmisión de la demanda. Denuncia, en primer lugar, el incumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 44 a) y c) LOTC, al considerar, por una parte, que ni se «utilizó el recurso administrativo procedente contra la resolución administrativa» ni se interpuso contra la Sentencia impugnada recurso de casación para unificación de doctrina, y por otra, que «el recurrente no ha citado en las dos instancias anteriores el derecho fundamental que considera violado». En cuanto al fondo de la demanda esgrime su manifiesta falta de contenido constitucional, puesto

que el órgano judicial se limitó a apreciar un defecto procesal «importante y acreditado». No hubo pues, a su juicio, vulneración del derecho a la tutela judicial, sin que, por lo demás, la supuesta vulneración del principio de legalidad proclamado en el art. 9.3 CE sea susceptible de ser denunciada en amparo ante este Tribunal.

2. Debemos comenzar rechazando las objeciones procesales planteadas por la Letrada de la Seguridad Social referentes a que la queja no agotó la vía administrativa ni la judicial ni fue invocada «en la dos instancias anteriores» [art. 44.1 a) y c) LOTC].

La primera de las objeciones resulta sorprendente en su primera parte, porque alega la falta de agotamiento de la vía administrativa y no de la judicial, que es la que se refieren los arts. 43 y 44 LOTC; porque la queja de amparo sitúa la vulneración denunciada en una resolución judicial; y porque, en todo caso, la resolución administrativa que está en el origen de las actuaciones fue recurrida en alzada y objeto de una nueva resolución administrativa que declaraba expresamente el fin de esta vía. Tampoco puede prosperar la objeción respecto a la falta de impugnación de la Sentencia recurrida mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina, de cuya indudable procedencia y posibilidad nada se argumenta. En relación específica con este recurso hemos afirmado que «dada su naturaleza extraordinaria, corresponde a la parte que pretende hacer valer su no interposición como motivo de inadmisibilidad de la demanda de amparo acreditar la posibilidad de recurrir en esta extraordinaria vía, absteniéndose de efectuar vagas invocaciones sobre la procedencia del recurso, pues es claro que la diligencia de la parte para la tutela de su derecho ante los Tribunales ordinarios no alcanza a exigirle, a priori, la interposición de recursos de dudosa viabilidad (SSTC 210/1994, de 11 de julio, FJ 2; 191/1996, de 26 de noviembre, FJ 2; 183/1998, de 17 de septiembre, FJ 2; 5/2003, de 20 de enero, FJ 2; 17/2003, de 30 de enero, FJ 2 y 84/2004, de 10 de mayo, FJ 3, por todas)» (STC 27/2007, de 12 de febrero, FJ 3).

Resulta también notoriamente infundado el óbice relativo a la falta de invocación del derecho vulnerado «en las dos instancias anteriores», a la vista de que el reproche constitucional ex art. 9.3 y 24.1 CE se dirige sólo hacia la resolución que ponía fin a la vía judicial. Ni podía haberse planteado antes tal vulneración ni, por lo dicho en el párrafo anterior, era exigible que se intentara plantear después ante una nueva instancia judicial.

3. Despejados los óbices procesales aducidos, procede ya examinar el fondo de la queja planteada por el recurrente, precisando que su análisis en esta sede sólo es posible desde la perspectiva del art. 24.1 CE y no desde la también invocada del art. 9.3 CE, pues este precepto no contiene un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional (arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC).

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que «el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello. De ahí que sea también respetuosa con este derecho fundamental una resolución judicial de inadmisión o de desestimación por algún motivo formal, cuando concorra alguna causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma (SSTC 71/2002, de 8 de abril, FJ 1; 59/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 114/2004, de 12 de julio, FJ 3; 79/2005, de 4 de abril, FJ 2; 221/2005 entre otras muchas)» (STC 33/2008, de 25 de febrero, FJ 2). También hemos afirmado de forma constante que «si bien el derecho a obtener una resolución de fondo se extiende tanto al ámbito del acceso a la jurisdicción como al del acceso al recurso, el alcance de este derecho no es el mismo en la fase inicial del proceso, una vez conseguida una primera respuesta

judicial a la pretensión, que “es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial para acceder al sistema judicial” (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5), que en las sucesivas fases de recursos que puedan interponerse contra esa decisión (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5)» (SSTC 221/2005, de 12 de septiembre, FJ 2; 33/2008, de 25 de febrero, FJ 2). Por ello, en el acceso a la jurisdicción, se proscriben no sólo la arbitrariedad, irrazonabilidad o el error patente, sino también «aquellas decisiones de inadmisión –o de no pronunciamiento sobre el fondo– que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión –o no pronunciamiento sobre el fondo– preservan y los intereses que sacrifican (entre otras muchas, SSTC 27/2003, de 10 de febrero, FJ 4; 3/2004, 14 de enero, FJ 3; 79/2005, de 2 de abril, FJ 2)» (SSTC 133/2005, de 21 de mayo, FJ 2; 33/2008, de 25 de febrero, FJ 2).

En desarrollo de la citada doctrina en materia de acceso a la jurisdicción este Tribunal ha considerado que «la decisión judicial de inadmitir el recurso contencioso planteado por la demandante, por el simple hecho de no reiterar en el suplico de la demanda contenciosa el concreto acto impugnado, cuando del cuerpo de dicha demanda se desprende con absoluta claridad cuál es la resolución administrativa impugnada y la pretensión respecto de la misma, no puede sino calificarse de una decisión excesivamente rigorista y formalista, que produce unos efectos desproporcionados, vulnerándose, por tanto, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente, en su vertiente de acceso a la jurisdicción» (STC 294/2005, de 21 de noviembre, FJ 3; en este mismo sentido la allí citada STC 113/2003, de 16 de junio).

La aplicación de la doctrina anterior conduce directamente al otorgamiento del amparo. La Sentencia ahora recurrida, tras reseñar que «resulta capital en la presente litis determinar el objeto de la misma establecido desde luego por el suplico de la demanda» (FJ 1), señala que «se ha omitido impugnar o accionar en la presente vía contenciosa contra aquella ulterior resolución ad quem otrora dictada y por demás inclusiva parcialmente estimatoria de aquella pretensión otrora formulada mediante aquel recurso de alzada en su día interpuesto en vía administrativa, de forma que por ende y con arreglo tanto a los arts. 45.1 y 78.1 y 23 como a la disposición final primera de aquella Ley 29/1998, de 13 de julio, en relación con el art. 416.1 de aquella otra Ley 1/2000, de 7 de enero, el presente recurso ha de ser desde luego desestimado» (FJ 4). Esta decisión debe calificarse de «excesivamente rigorista y formalista», generadora de «efectos desproporcionados», a la vista no sólo de que del cuerpo de la demanda contencioso-administrativa se desprendía con claridad que la misma se dirigía también contra la resolución de alzada –resolución que se cita e incluso se reproduce ampliamente en los hechos–, sino sobre todo en consideración a que la demanda se dirigía expresamente en su encabezamiento contra la «resolución estimatoria parcial notificada el 3 de julio de 2006 dictada por la Tesorería General de la Seguridad Social». La desestimación de la demanda por la razón de que esta concreta impugnación no figurara en el suplico de la misma, que se ceñía al petitum de anulación de la diligencia de embargo de 18 de mayo de 2006, constituye así un exceso en la interpretación de los requisitos procesales y en la búsqueda de agilidad y concreción que los mismos persiguen, máxime si se advierte que tal diligencia había sido parcialmente confirmada por la resolución cuya impugnación se dice omitida, por lo que cabía entender que la incorporaba, y que en ninguno de los artículos citados como justificativos de la inadmisión se establece expresamente que las resoluciones objeto de la impugnación deban figurar en el suplico de la demanda.

Procede en consecuencia estimar el recurso de amparo y anular la Sentencia impugnada, con retroacción de actuaciones para que se dicte otra respetuosa con el derecho del recurrente de acceso a la jurisdicción.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por don Manuel Gómez Barbeito y, en consecuencia:

1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2.º Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña 159/2006, de 7 de noviembre.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno para que se adopte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.—María Emilia Casas Baamonde.—Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.—Manuel Aragón Reyes.—Pablo Pérez Tremps.—Firmado y rubricado.

17409 *Sala Primera. Sentencia 115/2008, de 29 de septiembre de 2008. Recurso de amparo 11709-2006. Promovido por don José Manuel Velasco Lingres respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le condenó por un delito contra la seguridad del tráfico.*

Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 11709-2006, promovido por don José Manuel Velasco Lingres, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Celia López Ariza y bajo la dirección de la Letrada doña María del Carmen Galende Pedrejón, contra la Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de noviembre de 2006, dictada en el rollo de apelación núm. 384-2006, que estimó el recurso interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Madrid de 20 de octubre de 2005, dictada en el procedimiento abreviado núm. 303-2005, sobre delito contra la seguridad del tráfico. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado el 29 de diciembre de 2006, la Procuradora de los Tribunales doña Celia López Ariza, en nombre y representación de don José Manuel Velasco Lingres, y bajo la dirección de la Letrada doña María del Carmen Galende Pedrejón, interpuso demanda de amparo contra la resolución que se menciona en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El recurrente fue absuelto por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Madrid de 24 de octubre de 2005 del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del que era acusado. En la relación de hechos probados se hace constar que el acusado conducía su vehículo por la calle Ferraz «colisionando por causas que no se han acreditado» contra tres vehículos, a los que causó diversos daños y que, sometido a la prueba de alcoholemia, arrojó unos resultados de «0,76 y 0,66 mg/l a las 1:56 y 2:23 horas, respectivamente». En la fundamentación jurídica se expone que «aunque se tuviera por acreditado el hecho de la ingesta alcohólica, no podría considerarse sin embargo acreditado en el supuesto de autos que las dichas bebidas alcohólicas ingeridas hubieran influido sobre las facultades del sujeto, disminuyéndolas, y creando con ello una situación de riesgo para la circulación». Así, se señala que ni los agentes que redactaron el atestado ni una de las perjudicadas fueron testigos directos de los hechos y que los resultados de la prueba de alcoholemia no acreditan por sí solos una afectación de las facultades, sin que pueda considerarse concluyente la diligencia de signos externos sobre la que fueron interrogados en el plenario los agentes, ya que «existen datos que se asocian al estado de intoxicación etílica que contrastan con otros que parecen incompatibles con dicho estado. Llama poderosamente la atención el que no se haga ninguna mención acerca de posibles alteraciones en el equilibrio o reflejos del acusado, siendo así que deambulación se ha calificado de normal».

b) El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. de rollo 384-2006, alegando infracción de ley por inaplicación del art. 379 CP, al considerar que la afirmación expuesta en la fundamentación jurídica sobre que no resulta acreditada la influencia de bebidas alcohólicas en la conducción es contradictoria con los hechos probados en que se afirma que, sin causa ninguna, el acusado colisionó con tres vehículos, bajo la previa ingestión de bebidas alcohólicas. La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, sin celebración de vista, por Sentencia de 16 de noviembre de 2006, estimó el recurso de apelación con revocación de la Sentencia de instancia, condenando al recurrente como autor de un delito contra la seguridad de tráfico a la pena tres meses de multa con una cuota diaria de tres euros, un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor, responsabilidad civil y costas. La Sentencia de apelación modificó los hechos probados en el sentido de suprimir la frase «colisionando por causas que no se han acreditado», por la expresión «colisionando, debido al grado de alcohol en sangre que presentaba».

c) En la Sentencia de apelación, tras recordar la jurisprudencia constitucional sobre la inmediatez en la segunda instancia, se afirma que «el accidente tuvo como causa la incapacidad psicofísica que presentaba el acusado... para conducir vehículos de motor debido a la previa ingesta que de alcohol había efectuado lo que le hizo perder el control del mismo». Dicha conclusión la fundamenta, en primer lugar, en que conforme a los resultados arrojados por la prueba de detección alcohólica y teniendo en cuenta las normas de la lógica y de la experiencia,